JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C. Octubre veinte de dos mil veintidós.

REF. ACCIÓN DE TUTELA No.2022-01052-01 de GIOVANNY FERNANDEZ RODRIGUEZ contra INDRA COLOMBIA SAS.

Segunda instancia.

Se procede por el Despacho a decidir sobre la impugnación formulada por la parte accionante contra la decisión del Juzgado 39 Civil Municipal de fecha 22 de septiembre de 2022.

ANTECEDENTES.

El señor **GIOVANNY FERNANDEZ RODRIGUEZ** actuando en su propio nombre, presenta acción de tutela contra **INDRA COLOMBIA SAS.** para que se le protejan los derechos fundamentales A LA SALUD, TRABAJO, PROTECCIÓN SOCIAL y PROTECCIÓN ESPECIAL que considera están siendo vulnerados por la empresa accionada.

En síntesis, narra en sus hechos que Estuvo vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido con la empresa Indra Colombia S.A.S desde el día 20 de enero de 2020 al 10 de marzo de 2022, desempeñando el cargo de Gerente de Proyectos, con una asignación salarial mensual integral de trece millones (\$13.000.000) de pesos moneda corriente.

Señala que en el contrato laboral pacto un beneficio adicional de medicina prepagada de setecientos cincuenta mil pesos (\$750.000) pagaderos en efectivo mensualmente. Que también pacto un bono salarial atado al desempeño equivalente al 10% de los ingresos anuales pagadero anualmente.

Indica que en el desarrollo de sus funciones tenía a cargo 1 operación de servicios, teniendo en cuenta su buen desempeño en el mes de octubre le asignaron 3 operaciones más quedando a cargo de un total de 4 operaciones. Que En el primer bimestre del año 2021, Indra Colombia S.A.S llevó a cabo la evaluación de desempeño anual correspondiente al año 2020, cuyos resultados fueron sobresalientes por haber alcanzado la mayoría de las metas definidas por la empresa para las cuatro (4) operaciones asignadas.

Dice que Durante el mes de enero de 2021, le fueron asignadas cuatro operaciones de servicios adicionales quedando a cargo de todas las operaciones del área de servicios financieros. y Como resultado de la evaluación de desempeño obtuvo el reconocimiento del 75%, del bono anual pactado en el contrato y un incremento salarial del 3% sobre el salario base, quedando una asignación salarial mensual integral de trece millones trescientos noventa mil pesos (\$13.390.000) moneda corriente. Que Aunque el reconocimiento del incremento se realizó en el mes de enero de 2021, el pago se hizo efectivo a partir del mes de abril de 2021.

Refiere que En el mes de marzo de 2021, cambiaron al jefe inmediato y en el mes de abril de 2021, el nuevo jefe al darse cuenta de sus responsabilidades y los resultados frente a la operación inició la gestión para brindarle una nivelación salarial de acuerdo con el alcance de sus funciones. Esta situación dio resultados para el mes de julio, donde su salario fue incrementado un 20%, quedando una asignación salarial mensual integral de dieciséis millones de pesos (\$16.000.000) moneda corriente.

Refiere que El 30 de junio de 2021, presento síntomas de COVID 19, como malestar general, dolor de cuerpo, fiebre y dificultad para respirar. 13. A raíz de esa situación acudió a la EPS Sanitas, donde el médico que lo trató, le ordenó aislamiento preventivo por 10 días y le recomendó hacerse la prueba del COVID 19, efectuándosela el 5 de julio de 2021, la cual dio positiva, resultado que le fue entregado el 07 de julio de 2021.

Que el 09 de julio de 2021, se sentía muy mal de salud, por lo que acudió al servicio de urgencias donde lo internaron por medio día y posteriormente fue remitido a la clínica Cafam de la calle 93, debido a las condiciones de salud en las que se encontraba donde estuvo hospitalizado 6 días hasta el 14 de julio de 2021, en tratamiento por COVID 19. Siendo dado de alta el 14 de julio de 2021, y enviado a casa con incapacidad hospitalaria debido a que contaba con suministro de oxígeno y para el tratamiento y recuperación de la enfermedad.

Señala que El tratamiento incluía seguimiento médico por teleconsulta, medicamentos, suministro de oxígeno, terapias respiratorias y terapias físicas presenciales. Que en julio 26 fue a control presencial con el médico general de la EPS Sanitas, quién retiró de su tratamiento algunos medicamentos y lo remitió a los especialistas de medicina interna, psicología, psiquiatría, cardiología, neumología y gastroenterología.

Manifiesta que durante el tiempo transcurrido de la incapacidad hospitalaria perdió la capacidad de conciliar el sueño por lo que llevaba ya 15 días sin poder dormir, razón por la cual el 29 de julio de 2021, fue diagnosticado por el psiquiatra tratante con trastorno de adaptación. Que El 30 de julio finalizó la incapacidad hospitalaria emitida por la EPS, tiempo en el cual también presento una serie de complicaciones cardiacas, siendo atendido nuevamente por urgencias el 31 de julio por una crisis de ansiedad, y el galeno le ordenó nuevamente interconsulta con psicología y psiquiatría. Que Teniendo en cuenta la baja disponibilidad de especialistas en psicología y psiquiatría, decidió el 2 de agosto de 2021 acudir a un psiquiatra particular quién le diagnóstico y lo incapacitó hasta el 11 de agosto. Que también fue diagnosticado con insuficiencia cardiaca, recibiendo en adelante incapacidades consecutivas emitidas por el especialista particular en psiquiatría, tiempo en el cual también se encontraba en diagnóstico y tratamiento con los especialistas de cardiología, neumología y gastroenterología.

Que el 30 de agosto fue atendido por urgencias psiquiátricas en la EPS Sanitas que Posteriormente, fui dado de alta por el neumólogo y seguía en tratamiento de gastroenterología y cardiología. Que al no tener recursos económicos retorno a la atención con la EPS, dando inicio al tratamiento psiquiátrico y regreso a desempeñar sus funciones en Indra Colombia S.A.S. Que Aunque había permanecido incapacitado por 107 días, Indra Colombia S.A.S. nunca le ordenó un examen post incapacidad, como lo establece los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Aduce que Durante todo ese lapso, informo periódicamente su situación y circunstancias médicas a; sui jefe inmediato, responsable de seguimiento del área de HSEQE, Talento Humano y el área de seguimiento global de la compañía, quienes sabían que se encontraba en tratamiento psiquiátrico, con una duración estimada de 1 año, hasta septiembre de 2022.

Indica que Una vez se reincorporo a laborar, le asignaron menos responsabilidades que las que tenía asignadas justo antes de padecer el COVID, Que también le diagnosticaron varices en las piernas el 24 de noviembre de 2021, cuyo tratamiento se dio con medias de compresión y disminución de actividad física.

Que A finales de noviembre de 2021, el especialista de cardiología le indicó que su proceso de rehabilitación había terminado, quedando con una condición permanente de cuidado cardiovascular. Que Continuo el tratamiento psiquiátrico con la

EPS, y que en el mes de diciembre de 2021, tomo su periodo completo de vacaciones, en procura de su recuperación. Y que a pesar de las dificultades por su estado de salud las metas de cumplimiento para el año 2021 fueron alcanzadas en su mayoría logrando un porcentaje cercano al 75%.

Manifiesta que en enero de 2022, se reintegro de su periodo de vacaciones, esperando que le asignaran nuevamente la totalidad de sus funciones, aunque continuaba en tratamiento psiquiátrico. Y que teniendo en cuenta el resultado cuantitativo obtenido en el 2021 frente al cumplimiento de metas, solicito el reconocimiento del bono de desempeño, pactado en el contrato de trabajo, al área de Recursos Humanos, cuya respuesta fue negativa argumentando en el resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño.

Dice que se llevo a cabo la evaluación de desempeño del año 2021, y que nunca le fue comunicado el resultado.

Señala que El 10 de marzo de 2022, fue notificado de la decisión que había tomado la empresa de despedirlo sin justa causa, por lo que procedio a realizar la entrega de los elementos que le habían sido asignados y se fue. Que Posterior al despido, sufrio episodios de depresión e irritabilidad debido a la decisión que había tomado la empresa, esto sumado a los efectos secundarios del tratamiento a nivel físico, sexual y psicosocial

Indica que a la fecha no cuenta con un contrato laboral vigente y su familia también se ha visto afectada desde el inicio de la enfermedad hasta la fecha por la disminución de ingresos.

Solicita que a través de este mecanismo se tutelen los derechos fundamentales indicados y Que se declare la ineficacia de la terminación unilateral del contrato por parte de Indra Colombia S.A.S. que se ordene reintegrarlo a un cargo que ofrezca condiciones similares a las del cargo desempeñado hasta su desvinculación, u otro cargo con condiciones similares al del ejecutado anteriormente. Que le sea pagado el valor del EQG 2021, de acuerdo con los resultados del Performance goals, que se ubicó en 75% de acuerdo también con los objetivos trazados para 2021, lo que equivale al 10% de los pagos recibidos durante el año inmediatamente anterior. Que se ordene a Indra Colombia S.A.S pagarle los salarios y las prestaciones desde la fecha en que fue despedido hasta la fecha en que sea reintegrado. Que se ordene a Indra Colombia S.A.S pagarle la indemnización de 180 días de salario, y pagarle una indemnización equivalente a un mes de salario adicional por los daños morales causados debido a sus padecimientos de depresión y angustia. Que se

ordene a Indra Colombia S.A.S pagarle una indemnización equivalente a un mes de salario adicional por la afectación en su vida en relación con su esposa, sus hijos y con su familia en general.

Admitida la tutela por el Juzgado 39 Civil Municipal de esta ciudad, mediante auto de septiembre 8 de 2022, se dispuso la vinculación de del Ministerio del Trabajo, de la Eps Sanitas, de la Clinica Cafam y la Clinica Shaio y notificada la parte demandada da respuesta asi:

CAFAM

Manifiesta que CAFAM no es una E.P.S., ni se encuentra en la obligación legal de intervenir ante la empresa INDRA COLOMBIA S.A.S. para decidir sobre el reintegro laboral, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales, esto ya que no son responsabilidades legales de la I.P.S. CAFAM. Así las cosas, es muy importante aclarar al Despacho que el reconocimiento y pago de las pretensiones requeridas por el Accionante, corresponde a un servicio a cargo de la entidad accionada, en este caso INDRA COLOMBIA S.A.S., lo cual en ningún caso y conforme a las normas de Seguridad Social en salud le corresponden a la I.P.S. CAFAM, ya que la Caja de Compensación Familiar CAFAM, brinda servicios de salud a través de sus diferentes I.P.S., debidamente habilitadas por el Asegurador, por ende, no es su competencia dirimir controversias que son netamente de la relación entre la Accionante y el Accionado

CLINICA SHAI0

Indica que el accionante fue atendido enm varias oportunidades.

Que la Fundación no es la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la acción constitucional por lo que se abstiene de pronunciarse frente a los hechos.

INDRA COLOMBIA SAS

Indica que la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo del señor Fernández Rodriguez, se originó en la habilitación legal que le concede a la Empresa, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo consistente en la terminación del contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa con el pago de la correspondiente indemnización, luego de que corporativamente así se decidiera para evitar controversias sobre Tutela No. 2022-01052-01 Segunda Instancia

la existencia o no de una justa causa toda vez que, se identificaron causas que generaron un rompimiento radical de la lealtad y confianza que debe depositarse por las partes en las relaciones laborales, más aún en el desarrollo de un rol tan importante como lo es, la Gerencia de Proyectos.

Dice que entre el señor Fernández Rodríguez y la empresa existió un contrato de trabajo que finalizó el 10 de marzo de 2022, por decisión unilateral y sin justa causa con el pago de la correspondiente indemnización, disposición que le fue notificada en la comunicación de la misma fecha a aquel dirigida, destacando que esta decisión fue tomada únicamente con el fin de evitar controversias con el accionante.

Que de igual forma, se precisa que, a la finalización de la relación laboral, el accionante no presentó a la Empresa prueba alguna de la que se pudiera desprender que sus ingresos fueran el único sustento de su hogar. Y acorde con ello, se tiene que no se cumplen ninguno de los preceptos legales y constitucionales que determinen afectación alguna del mínimo vital del señor Fernández Rodríguez y menos acredita ser un sujeto de especial protección, mucho más cuando después de 6 mes de haberse producido la terminación del contrato de trabajo, decide radicar la acción de tutela, lo que demuestra sin duda alguna que no existe un perjuicio irremediable y que no requiere de acciones inmediatas porque no hay infracción de derechos fundamentales y por lo tanto, tampoco cumple el test de resiliencia propio de las acciones de tutela.

Señala que las causas de la terminación del contrato de trabajo fueron debidamente conocidas por el accionante en aras de brindar transparencia en las decisiones corporativas, pese a que la Empresa no se encontraba legalmente obligada hacerlo. Que La indemnización que la Empresa reconoció al accionante conforme lo establece la Ley ascendió a la suma de \$19.800.000.

Que no se ha afectado el mínimo vital del accionante ya que se hizo el pago de la indemnización con lo cual se puede solventar mientras se ubica laboralmente.

MINTRABAJO

Señala que debe declararse la improcedencia de la acción de tutela en referencia contra el Ministerio del Trabajo, por falta de legitimación por pasiva, toda vez que esa Entidad no es ni fue la empleadora del accionante, lo que implica que no existe ni existió un vínculo de carácter laboral entre el demandante y la Entidad, y por lo mismo, no existen obligaciones ni derechos

Tutela No. 2022-01052-01 Segunda Instancia

recíprocos entre los dos, lo que da lugar a que haya ausencia por parte de ese Ministerio, bien sea por acción u omisión, de vulneración o amenaza de derecho fundamental alguno.

SANITAS

Dice que las afirmaciones carecen de cualquier sustento jurídico, que se relacionen con EPS SANITAS S.A.S, toda vez que, tal cual se observa en las pretensiones de la tutela, la supuesta vulneración bajo ninguna circunstancia encuentra su génesis en alguna actuación u omisión de Sanitas, y por tal razón la presente acción en el caso concreto se presenta el fenómeno de la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. Lo anterior, por tratarse hechos y pretensiones incoadas en contra INDRA COLOMBIA S.A.S. como empleador y único que ha incurrido en la posible violación de derechos fundamentales del accionante, por tal razón se deberá desvincular a la EPS SANITAS S.A.S.

El Juzgado 39 Civil Municipal de esta ciudad, negó las pretensiones de la tutela mediante sentencia de septiembre 22 de 2022, fallo contra el cual impugno el accionante.

CONSIDERACIONES:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Del caso Concreto:

Concurre a esta judicatura el señor GIOVANNY FERNANDEZ RODRIGUEZ solicitando se declare la ineficacia de la terminación unilateral del contrato por parte de Indra Colombia S.A.S. que se ordene reintegrarlo a un cargo que
Tutela No. 2022-01052-01 Segunda Instancia

ofrezca condiciones similares a las del cargo desempeñado hasta su desvinculación, u otro cargo con condiciones similares al del ejecutado anteriormente. Que le sea pagado el valor del EQG 2021, de acuerdo con los resultados del Performance goals, que se ubicó en 75% de acuerdo también con los objetivos trazados para 2021, lo que equivale al 10% de los pagos recibidos durante el año inmediatamente anterior. Que se ordene a Indra Colombia S.A.S pagarle los salarios y las prestaciones desde la fecha en que fue despedido hasta la fecha en que sea reintegrado. Que se ordene a Indra Colombia S.A.S pagarle la indemnización de 180 días de salario, y pagarle una indemnización equivalente a un mes de salario adicional por los daños morales causados debido a sus padecimientos de depresión y angustia. Que se ordene a Indra Colombia S.A.S pagarle una indemnización equivalente a un mes de salario adicional por la afectación en su vida en relación con su esposa, sus hijos y con su familia en general.

Procedencia de la acción de tutela

Legitimación activa

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando “*el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa*”. En la misma norma, se establece que la legitimación por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa.

En el presente caso se encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa toda vez que la tutela la presenta el señor GIOVANNY FERNANDEZ RODRIGUEZ en causa propia.

Legitimación por pasiva

La legitimación por pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales. En este caso la parte accionada es INDRA COLOMBIA SAS.

Inmediatez

Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales, cumpliéndose en este caso dicho requisito.

Subsidiariedad

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Con respecto a la Estabilidad Laboral Reforzada conviene indicar que en la sentencia **SU-049 de 2017** la Sala Plena de la Corte Constitucional, estableció que la estabilidad laboral reforzada cobija a todo aquel que presente una situación grave o relevante de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores; por tanto, esta protección especial no se debe limitar a quienes han sido calificados con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, o cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral.

Indica la alta corporación en sentencia **T-041** de 2019: “Pero ¿quiénes pueden ser considerados como sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta por motivos de salud? Al respecto, esta Corporación ha establecido que un trabajador que: “i) pueda catalogarse como persona con discapacidad, ii) con disminución física, síquica o sensorial en un grado relevante, y (iii) en general todas aquellos que (a) tengan una afectación grave en su salud; (b) esa circunstancia les ‘impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares’, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, **está en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tiene derecho a la ‘estabilidad laboral reforzada’.**”

En el caso materia de estudio no hay lugar a la estabilidad laboral reforzada, por cuanto la terminación del contrato de trabajo se dio sin justa causa con el pago de la indemnización .

Cabe precisar que el trabajador hoy accionante al momento de la terminación del contrato, no se encontraba

incapacitado, por tanto, no se dan las premisas que indica la Corte Constitucional, para que sea objeto de la estabilidad laboral reforzada, por cuanto no se le puede catalogar como una persona *con discapacidad, con disminución física, síquica o sensorial ya que como se ha dicho al momento de la finalización del contrato se encontraba laborando.*

No hay lugar a conceder el amparo solicitado, teniendo en cuenta que no se demostró la vulneración al mínimo vital máxime cuando la empresa accionada le hizo el pago de la indemnización. Y tampoco hay lugar a declarar la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo, toda vez que ello no es competencia del Juez constitucional.

Lo pedido en esta tutela, sobre el reintegro laboral, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales debe ventilarse a través del proceso ordinario laboral, por consiguiente el accionante tiene otro medio al cual acudir que es la jurisdicción ordinaria escenario propicio para debatir lo pretendido en esta tutela.

Al tener el accionante otro mecanismo al cual acudir, no se cumplió con el requisito de subsidiariedad.

A este respecto, La Corte Constitucional en la sentencia T-375 de 2018 indicó que: «El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que “permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos”. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección».

Con fundamento en lo anterior, el fallo que en vía de impugnación se ha estudiado debe confirmarse toda vez que se

ajusta a normas legales y constituciones y no amerita revocatoria ni nulidad alguna.

En consecuencia ha de confirmarse el fallo de primera instancia, el cual ,se ajusta a normas legales y constitucionales.

Por lo expuesto, el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE :

1.- CONFIRMAR El fallo de tutela proferido por el JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL de esta ciudad de fecha 22 de septiembre de 2022.

2º.- Notifíqueseles a las partes el presente fallo por el medio más expedito.

3 . Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c026cecb7e4ef99800e5ca88761332049fa725053907edeb8a650e64f7f7bc85**

Documento generado en 20/10/2022 09:22:53 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**